

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 40/2012.**

SERVIDOR PÚBLICO: ***.**

México, Distrito Federal a veinticuatro de noviembre de
dos mil catorce.

VISTOS; para emitir resolución definitiva en el
procedimiento de responsabilidad administrativa **40/2012**; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Denuncia. El veintitrés de mayo de dos mil doce, la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial dio cuenta al Contralor, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio DGPC-05-2012-1830 del dieciocho de mayo de dos mil doce, recibido el veintidós del mismo mes y año, signado por el Director General de Presupuesto y Contabilidad de este Alto Tribunal, en el que informó que mediante oficio DGPC-05-2012-1823, solicitó al Director General de Recursos Humanos se le aplicara descuento vía nómina al servidor público ***** de los viáticos no comprobados en el plazo establecido, en la comisión **DGCVS-041-2012** lo que motivó que se iniciara, de oficio, el cuaderno de investigación **C.I. 40/2012** (fojas 35 a 37 del expediente principal).

SEGUNDO. Procedimiento. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó iniciar a trámite el

procedimiento de responsabilidad administrativa **40/2012**, en contra de *********, por estimar que existían elementos suficientes para presumir que incurrió en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en relación con el los artículos 130, 132 y cuarto transitorio, del Acuerdo General de Administración I/2012 DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTABILIDAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el mismo proveído se ordenó requerir al servidor público señalado, a efecto de que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, rindiera el informe concerniente a los hechos que se le imputan y exhibiera las pruebas que estimara pertinentes.

En auto de veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Contralor tuvo por presentado el informe de defensas a ********* en tiempo y forma, en el que ofreció como pruebas copias simples que acompañó a su informe, referentes a la comprobación de la comisión **DGCVS-041-2012**, las cuales se tuvieron como admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza (foja 360 del expediente principal); mediante proveído de diez de noviembre de dos mil catorce, se declaró cerrada la instrucción en términos del artículo 39, segundo párrafo, del citado Acuerdo Plenario 9/2005. Asimismo, el doce de noviembre de dos mil catorce, el Contralor emitió el dictamen en el sentido de que existían

elementos suficientes para tener demostrada la infracción administrativa atribuida a ***** por cuya razón propuso sancionarlo con **Amonestación Pública**.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXIII, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23 y 25, segundo párrafo, del Acuerdo Plenario 9/2005, en tanto se trata de un servidor público de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está expresamente catalogada como grave, ni se considera como tal en el caso concreto.

SEGUNDO. Marco normativo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del citado Acuerdo Plenario 9/2005, en todas las cuestiones relativas al procedimiento será aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en lo que no se oponga a ésta la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudirse a los principios generales de derecho, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones.

TERCERO. Análisis de la conducta atribuida al servidor público. Del auto por el que se dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte

que la infracción administrativa que se atribuye a ***** es la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el punto Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003.

Bajo ese orden de ideas, se tiene presente que el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé las causas de responsabilidad que pueden atribuirse a sus servidores públicos por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

***“Artículo 131.** Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:*

(...)

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional...;”

Luego, la obligación de cumplir las leyes y la normativa que determina el manejo de recursos económicos públicos deriva del artículo 8, fracción II de la citada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se transcribe en lo conducente:

***“Artículo 8.** Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:*

(...)

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;”

La disposición prevista en el artículo 8, fracción II de la citada Ley de Responsabilidades, contiene dos obligaciones específicas para los servidores públicos, que consisten en:

a) Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y

b) Cumplir con lo dispuesto en las normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

En la redacción utilizada por el legislador, entre ambas hipótesis, destaca el uso de la conjunción copulativa “y” que es definida en el Diccionario de la Lengua Española como *“unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo”*; en ese tenor, dicha conjunción denota que la obligación mencionada en segundo término se encuentra unida a la primera y, por tanto, también lo que hace a su incumplimiento.

No obstante, el vínculo establecido por el legislador mediante dicha conjunción, no significa que siempre deban cumplirse simultáneamente los dos deberes, pues si bien es cierto que ambos supuestos están encaminados a regular cuestiones relacionadas con los recursos económicos públicos, también lo es que una u otra obligación pueden cumplirse independientemente, atendiendo a las funciones específicas asignadas a cada servidor público, ya que sólo algunos tienen la encomienda de formular y ejecutar planes, programas y presupuestos, mientras que a cualquiera de ellos, en algún momento, puede asignarse el manejo de recursos públicos, por lo que en todo caso están obligados a observar las leyes y normas que determinan su manejo y ejercicio.

En ese sentido, el desacato a cualquiera de las hipótesis previstas en la fracción que se comenta puede configurar una infracción administrativa, ya que la primera se aplica únicamente a aquellos servidores públicos que desempeñen funciones relacionadas, directamente, con la elaboración y ejecución de planes, programas y presupuestos, de ahí que condicionar la

obligación de acatar cualquier disposición o norma relacionada con el manejo de recursos públicos al incumplimiento de la primera hipótesis limitaría el alcance de la obligación que se tiene para los servidores públicos de la Federación de ejercer los recursos públicos que se les asignen con apego en la normativa que sea aplicable.

En el caso en estudio, debe atenderse a la segunda hipótesis de la fracción II del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, esto es, el incumplimiento de cualquier ley o norma relativa al manejo de recursos públicos.

Por tanto, debe determinarse cuál es la norma que regulaba la obligación relativa a la comprobación de viáticos en la época en que tuvo lugar la comisión **DGCVS-041-2012**, encomendada a *****.

Al respecto, es preciso señalar que en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por regla general, la ley aplicable es aquella que ha sido emitida con anterioridad al hecho infractor.

La comisión que le fue encomendada tuvo lugar en la siguiente fecha:

Comisión	Fecha de la comisión
DGCVS-041-2012	Del 27 de marzo al 1 de abril de 2012

Así, por la fecha en que se desarrolló la comisión, resulta aplicable el Acuerdo General de Administración XII/2003, el cual estuvo vigente hasta el treinta de junio de dos mil doce. Sin embargo, como dicho instrumento normativo fue abrogado por el diverso Acuerdo General de Administración I/2012 que entró en vigor el primero de julio del año en cita, según su artículo

transitorio segundo¹, resulta necesario realizar un análisis sobre las obligaciones en materia de comprobación de viáticos previstas en ambos ordenamientos, con la finalidad de constatar si las obligaciones relacionadas con la comprobación de viáticos siguen vigentes y, en su caso, evitar la aplicación retroactiva del Acuerdo I/2012 mencionado.

En ese orden de ideas, es menester precisar que el término abrogar significa la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de un ordenamiento jurídico. En el caso, la abrogación del Acuerdo General de Administración XII/2003 fue expresa, debido a que el artículo transitorio segundo del diverso Acuerdo I/2012, así lo declara.

Pese a que el Acuerdo General de Administración XII/2003 fue abrogado expresamente en el artículo transitorio segundo del Acuerdo I/2012, lo cierto es que el diverso artículo cuarto transitorio de este último establece una excepción a la abrogación a que se refiere el transitorio segundo, en el tenor siguiente:

“CUARTO. Los lineamientos que se deriven del presente acuerdo, serán elaborados por las áreas competentes dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo y sometidos a la aprobación del Comité de Gobierno por conducto de la Oficialía Mayor.

En tanto estos lineamientos sean emitidos, seguirán rigiéndose, en lo que no se oponga el presente Acuerdo, la normatividad vigente. Anualmente, la Oficialía Mayor con apoyo en las Unidades Responsables respectivas, revisará el contenido de los lineamientos a que se refiere este artículo transitorio y de ser el caso propondrá al Comité de Gobierno las modificaciones correspondientes”.

¹ ***“PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor el día primero de julio de dos mil doce.***

SEGUNDO. Se abrogan los Acuerdos Generales de Administración 23/99, del primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el que se determinan los lineamientos para la inversión de los recursos presupuestales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 24/99, del primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el que se determinan las políticas, normas y lineamientos para el ejercicio del presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; XII/2003, del nueve de septiembre de dos mil tres, por el que se establece el sistema de contratación y pago de hospedaje, transporte y otorgamiento de viáticos para las comisiones asignadas a los servidores públicos de este Alto Tribunal...;”

Previamente a desentrañar el contenido y alcance del dispositivo acabado de transcribir, cabe enfatizar que los artículos transitorios forman parte del nuevo Acuerdo, de ahí que su observancia sea obligatoria, pues en los mismos se establecen, entre otras cuestiones, la fecha en que empezará a regir, o lo atinente a su aplicación, lo cual permite la etapa de transición entre la vigencia de un acuerdo y el que lo abroga.

El primer párrafo del artículo cuarto transitorio constriñe a que dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo General de Administración I/2012, se expidan los lineamientos que al efecto se prevén en ese ordenamiento.

La literalidad del segundo párrafo de esa norma en tránsito, permite advertir que la voluntad del órgano creador del Acuerdo I/2012, fue que hasta que entraran en vigor los lineamientos citados continuarían aplicándose todas aquellas reglas de la normativa vigente que no se opusieran a las establecidas en el nuevo ordenamiento.

Por lo anterior, a continuación se realiza un análisis comparativo de las diversas disposiciones que regulan la comprobación de viáticos en los Acuerdos Generales de Administración XII/2003 y I/2012, como se ilustra en la siguiente tabla:

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	
ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XII/2003	ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN I/2012
<i>“DÉCIMO SEXTO.- Al término de su comisión, las personas comisionadas de los grupos 2, 3 y 4, deberán rendir un “Informe de Viáticos” en el formato que indique la Oficina de Viáticos, el cual deberá contener un breve resumen a cerca de la calidad de los servicios recibidos e incluir la siguiente leyenda: “Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos. Asimismo manifiesto tener conocimiento de lo dispuesto en el Acuerdo General de Administración XII/2003, del nueve de septiembre de dos mil tres, por el que se establece el Sistema de Contratación y Pago de Hospedaje, Transporte y el otorgamiento de Viáticos para las comisiones asignadas a los servidores públicos de este Alto Tribunal y de las sanciones que</i>	<i>“Artículo 130. Los viáticos deberán ser comprobados ante la Tesorería mediante documentos expedidos por terceros que reúnan los requisitos fiscales, y en los plazos correspondientes, conforme se establezca en los lineamientos. Los comisionados serán responsables de recabar la factura que ampare el gasto del hospedaje para su debida comprobación. En aquellos casos en que por la naturaleza de los servicios no haya sido posible recabar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, los comisionados podrán no comprobar hasta un 30% del total de viáticos recibidos en cada ocasión.</i>

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	
ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XII/2003	ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN I/2012
<i>se aplicarán en caso de que los datos referidos no sean verídicos”. Además, deberá indicarse la fecha de la elaboración y contener la firma autógrafa de la persona comisionada.</i> <i>La comprobación de gastos deberá realizarse a más tardar a los quince días hábiles siguientes a la realización de la comisión encomendada.</i>	<i>El responsable de la comprobación del viático será el servidor público de la Suprema Corte al que se le haya otorgado el recurso para la comisión.</i> <i>En todo caso, será responsabilidad de los Coordinadores o Enlaces Administrativos de cada Unidad Responsable, tramitar y dar seguimiento a la comprobación de los viáticos”.</i>

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS	
COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN I/2012
En sesión de primero de febrero de dos mil ocho, precisó que en relación con la devolución de viáticos no utilizados en una comisión, debían depositarse en la cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además especificó que la comprobación del uso de los viáticos también implicaba adjuntar el original del documento expedido por la institución bancaria como constancia del depósito de los recursos no empleados.	“Artículo 132. El monto de viáticos no comprobados en términos del artículo 130 de este Acuerdo General, deberá ser reintegrado a la Suprema Corte mediante su depósito en los plazos establecidos para tal efecto y, en caso de incumplimiento, por descuento vía nómina al servidor público responsable de su comprobación, informando a la Contraloría de la Suprema Corte. La comprobación de la transportación aérea reservada por la Tesorería será realizada por ésta, con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales vigentes. En los casos que se cancele o modifique (cambio de itinerario) una comisión para la cual se haya solicitado a la Tesorería la reservación de la transportación aérea, será responsabilidad del comisionado dar aviso oportuno a la Tesorería con la justificación correspondiente y la autorización de su superior jerárquico, para realizar el trámite de cancelación del mismo”.

La confrontación entre el Acuerdo General de Administración XII/2003 y lo dispuesto en el diverso I/2012, permite señalar que en ambos se establece la obligación de los servidores públicos a quienes se le otorgan viáticos con motivo de una comisión, de comprobar el ejercicio de los recursos otorgados por ese concepto.

Así mismo, de la comparación entre lo dispuesto por el Comité de Gobierno y Administración en sesión de primero de febrero de dos mil ocho y el Acuerdo General de Administración I/2012, se colige que antes de la entrada en vigor de este último, ya existía la obligación de devolver los recursos no utilizados por el comisionado, la cual subsiste en este último Acuerdo.

Luego, en cuanto al término para realizar la comprobación de viáticos, en el Acuerdo XII/2003, se establecía un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en

que se realizó la comisión, esto es, el servidor contaba con quince días hábiles para comprobar los gastos de la comisión y devolver el monto no utilizado.

Por su parte, el Acuerdo General de Administración I/2012, establece en su artículo 130 la existencia de un término para cumplir con esa obligación, pero no precisa cuántos días, sino que remite a los lineamientos correspondientes, de los cuales no se tiene conocimiento que hayan sido expedidos a la fecha.

Conforme a las razones que se han expuesto con anterioridad, resulta válido concluir que los citados Acuerdos, de manera alguna, se oponen entre sí, ya que en ambos se prevé que las acciones de comprobación y de devolución deben realizarse dentro de un plazo, sólo que en el anterior ordenamiento sí se precisa que éste es de quince días y en el ahora vigente hace una remisión a los lineamientos correspondientes que no han sido emitidos, de ahí que en este aspecto, el último ordenamiento se complementa con el anterior y, en esa medida, en términos de lo que dispone el artículo cuarto transitorio, segundo párrafo del Acuerdo General de Administración I/2012, resulta procedente la aplicación de las disposiciones del Acuerdo General de Administración XII/2003, relativas a la obligación de comprobar el ejercicio de viáticos y devolver el monto de los recursos no utilizados en un plazo de quince días hábiles. Dicho en otras palabras, esas disposiciones, por excepción expresa del artículo cuarto transitorio en comento, no han dejado de tener vigencia, por lo que su incumplimiento puede ser reprochado mediante el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Determinada que ha sido la norma que regula el ejercicio y comprobación de los viáticos otorgados a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reitera que el punto Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración

XII/2003 señala que es obligación de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la rendición de un informe de viáticos y la comprobación de los gastos efectuados a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a que se concluya la comisión.

Lo anterior, al concatenarse con lo establecido en el punto segundo, fracciones XI y XII del Acuerdo General de Administración XII/2003², permite inferir que la comprobación de los viáticos implica no sólo la presentación de un informe de los recursos ejercidos en una comisión y de los documentos que acrediten los gastos efectuados, sino también la devolución del remanente, esto es, del dinero no erogado en dicha comisión.

En otras palabras, debido a que los viáticos son recursos públicos del Alto Tribunal entregados a un servidor público para cubrir los costes de alimentación, transportación local y cualquier gasto similar o conexo con éstos, derivados de una comisión, surgen para el comisionado dos obligaciones relativas al manejo de esos recursos. La primera, comprobar los gastos erogados y la segunda, regresar el remanente cuando exista, en el entendido de que ambas acciones deben llevarse a cabo en los términos del segundo párrafo del punto Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de la comisión.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Comité de Gobierno y Administración, en sesión de primero de febrero de dos mil ocho, precisó que en relación con la devolución de viáticos no utilizados en una comisión, debían depositarse en la cuenta de

² SEGUNDO. Para efectos de este acuerdo se entenderá por:
(...)

XI. Comprobante: Documento que acredita los gastos realizados con motivo de la comisión, el cual deberá cumplir los requisitos fiscales señalados en la legislación respectiva. Los comprobantes no aceptados se devolverán al comisionado y en caso de no ser sustituidos, se aplicarán los gastos como no comprobados y se sumarán al sueldo del comisionado integrando su base gravable para efectos del impuesto sobre la renta.

XII. Informe de Viáticos: Documento que deberá suscribir la persona comisionada al término del viaje, en el que informará a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad acerca de los gastos realizados y la calidad de los servicios recibidos...;

la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además, especificó que la comprobación del uso de los viáticos también implicaba adjuntar el original del documento expedido por la institución bancaria como constancia del depósito de los recursos no empleados.

En consecuencia, se reitera, atendiendo al fin que tiene el Acuerdo General de Administración XII/2003 y, en específico, el punto Décimo Sexto, debe entenderse que la devolución del remanente es una acción vinculada a la comprobación del ejercicio de los recursos públicos que se otorgaron para el desempeño de una comisión oficial, por ello, se sigue el criterio de que la devolución debe realizarse dentro del plazo de quince días hábiles señalados para la comprobación; por ende, el desacato a la obligación de comprobar viáticos en los términos indicados en el acuerdo general referido, conlleva el incumplimiento de la fracción II del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Como se precisó en el acuerdo de inicio de este procedimiento, con las copias certificadas de la solicitud de viáticos y la relación de gastos devengados en la comisión **DGCVS-041-2012**, que obran a fojas 7 y 271 del expediente principal, respectivamente, se advierte que ***** fue comisionado a la Ciudad de ***** , ***** , del veintisiete de marzo al primero de abril de dos mil doce, para el desarrollo de la “Feria del Libro Jurídico” y “Jornadas de Actualización Jurisprudencial de Pleno y Salas” y se le otorgaron viáticos por un monto de \$12,900.00 (doce mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), para llevar a cabo esa encomienda; por lo que estaba obligado a presentar la comprobación de viáticos y el depósito del remanente correspondiente, dentro de los quince días hábiles siguientes a que llevó a cabo dicha tarea, de ahí que ese plazo transcurrió del dos al veinticinco de abril de dos mil doce, descontando los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y

veintidós de abril de dos mil doce, por ser inhábiles al haber correspondido a sábados y domingos, respectivamente, así como cuatro, cinco y seis de esos propios mes y año, por haber sido inhábiles.

La entrega del dinero que por concepto de viáticos se asignó a ***** para ejecutar la comisión referida, se acredita con el oficio OM/DGT/SGT/DIVT/SV/3613/09/2012, con el que la Dirección General de la Tesorería remitió copia simple del comprobante de traspasos de nómina de veintiséis de marzo de dos mil doce, el cual refleja que en esa fecha se abonaron \$12,900.00 (doce mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), a la cuenta bancaria del referido servidor público, cantidad que según lo informó la titular de esa Dirección General, corresponde a la comisión **DGCVS-041-2012** (fojas 268 y 272 del expediente principal).

En el caso, ***** presentó oportunamente la documentación comprobatoria de la comisión **DGCVS-041-2012** y la correspondiente relación de gastos devengados (como se advierte de la copia certificada visible en la foja 7 del expediente principal), ya que ésta fue recibida oportunamente en la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, el diecinueve de abril de dos mil doce.

***** informó en la relación de gastos devengados, que \$9,231.72 (nueve mil doscientos treinta y un pesos 72/100 moneda nacional) eran los recursos devengados y que \$3,668.28 (tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 28/100 moneda nacional), era el monto del remanente de viáticos.

Respecto a la devolución del remanente, en el oficio OM/DGT/SGT/DIVT/SV/3613/09/2012 (foja 268 del expediente principal), la Directora General de la Tesorería informó que en los registros de ingreso de la cuenta del Alto Tribunal del uno de

enero al treinta de agosto de dos mil doce no se encontró depósito por reintegro de viáticos de la comisión **DGCVS-041-2012**.

Incluso el Director General de Presupuesto y Contabilidad en su oficio **DGPC-05-2012-1830** (foja 1 del expediente principal), informó que como ********* no cumplió con el plazo establecido en el Acuerdo General de Administración XII/2003 para la comprobación de viáticos de la comisión **DGCVS-041-2012**, solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos mediante el oficio **DGPC-05-2012-1823** del cual obra copia de conocimiento a foja 34 del expediente principal, que se aplicara a ese servidor público el descuento vía nómina por \$3,668.28 (tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 28/100 moneda nacional).

De la copia de conocimiento del oficio **DGRH-DN-08-616-2012** se advierte que la Directora de Nómina comunicó al Director General de Presupuesto y Contabilidad que a ********* se le aplicaron seis descuentos, vía nómina, de la primera quincena de junio a la segunda de agosto de dos mil doce, por la cantidad de \$3,668.28 (tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) que corresponden al saldo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los viáticos otorgados en la comisión **DGCVS-041-2012** (foja 265 del expediente principal).

Los oficios **DGPC-05-2012-1830**, y **OM/DGT/SGT/DIVT/SV/3613/09/2012**, las copias de conocimiento de los oficios **DGPC-05-2012-1823** y **DGRH-DN-08-616-2012**, así como las copias certificadas de la solicitud de viáticos, relación de gastos devengados de la comisión **DGCVS-041-2012**, y del nombramiento definitivo del servidor público, constituyen documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades, conforme a los diversos 4 del

Acuerdo General Plenario 9/2005 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por haber sido expedidos por funcionarios en ejercicio de las facultades que la norma les otorgaba.

La copia simple del comprobante de traspasos de nómina realizada a la cuenta del servidor público, al vincularse con el oficio OM/DGT/SGT/DIVT/SV/3613/09/2012 de la Dirección General de la Tesorería con el que fue remitido, genera convicción de su contenido, pues dicho documento fue anexado para dar contestación a un requerimiento de la Contraloría, lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 93, fracción II, 133, 136, 197, 199, y 203 del código procesal en comento.

Conforme a lo señalado, queda demostrado que si bien ***** presentó de manera oportuna la comprobación de los viáticos de la comisión **DGCVS-041-2012**, lo cierto es que, no depósito su remanente, de ahí que se puede afirmar que dicho servidor público incumplió el punto Décimo Sexto del Acuerdo General del Administración XII/2003.

Por tanto, al incumplir con una norma relativa al manejo de recursos económicos públicos, en concreto, el punto Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003, mismo que continua vigente conforme a lo expuesto anteriormente, respecto de la comprobación de los viáticos otorgados para desempeñar la comisión **DGCVS-041-2012**, ya que aun cuando la presentó de manera oportuna, no devolvió el monto que resultó como remanente, es dable concluir que ***** se apartó, de la obligación contenida en el artículo 8, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y con ello es responsable de la infracción prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En el informe que presentó ***** el catorce de agosto de dos mil catorce (fojas 324 a 358 del expediente principal) destaca:

Manifiesta que cumplió con la comisión que le fue encomendada por el Alto Tribunal y que anexaba copia de las facturas correspondientes; agregó que no fue su propósito abstenerse de hacer el depósito del saldo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cantidad de \$3,668.28 (tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) sino que por la carga de trabajo ello le fue imposible ya que cumplía con otras comisiones y de esa forma faltó a su responsabilidad.

Respecto a los argumentos defensivos reseñados, debe precisarse que las simples afirmaciones en el sentido de que la comisión que le fue encomendada por el Alto Tribunal, fue cumplida, así como, que no había sido su propósito omitir el depósito del saldo a favor, lo que dice le fue imposible por la carga de trabajo, ya que cumplía con otras comisiones; no desvirtúan la infracción, ya que es necesario destacar que se trata de dos obligaciones distintas, una cumplir con la comisión que le fue encomendada y, otra, cumplir oportunamente con la comprobación de los viáticos otorgados para desempeñar la comisión y depositar, en su caso, el remanente; siendo que el cumplimiento de la primera, aun en los términos que precisa que se llevó a cabo, no lo exime de atender en el plazo establecido, la comprobación de los viáticos y el depósito, en su caso del remanente.

En lo referente a que no hizo el depósito en tiempo y forma, del saldo correspondiente a la comisión, debido a la carga de trabajo, ya que cumplía con otras comisiones, debe decirse que

las documentales que ofreció como pruebas son ineficaces para desvirtuar la infracción y relevarlo de la responsabilidad, toda vez que se trata de documentos en copia simple que en principio carecen de valor probatorio, pero aun cuando estuvieran perfeccionados mediante cotejo con sus originales, solamente demostrarían la fecha en que se presentó la relación de viáticos y que sí se acompañaron a ésta, los documentos comprobatorios de los gastos erogados en la comisión, pero no acreditan que depositó el remanente.

En consecuencia, como las manifestaciones de defensa que hace valer ***** resultan infundadas e ineficaces para desvirtuar su responsabilidad, se le considera plenamente responsable de la infracción prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir la obligación contenida en el artículo 8, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación el punto décimo sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003.

CUARTO. Sanción. A efecto de individualizar la sanción que le corresponde a *****, ya que presentó de manera oportuna la comprobación de viáticos devengados en la comisión **DGCVS-041-2012**, pero no depósito en tiempo el monto total de remanente de dichos recursos que se le otorgaron como viáticos en el desempeño de una comisión oficial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 135, fracción I, 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 45, fracción II, y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, se deben atender los siguientes aspectos:

I. Gravedad de la infracción. En términos de lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la infracción cometida por ***** no está catalogada como grave, ni se considera así en el caso concreto.

II. Circunstancias socioeconómicas. No es necesario analizarlas dado que en este caso no se impondrá sanción pecuniaria, en tanto con la conducta infractora no ocasionó un perjuicio económico a este Alto Tribunal, debido a que se reintegraron, los recursos económicos otorgados para la multicitada comisión; y, no se advierte que el servidor público hubiese obtenido un lucro o beneficio indebido.

III. Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio. De la solicitud de viáticos, del recibo de abono y del nombramiento vigente en el expediente personal, se advierte que el servidor público ***** en la época en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen tenía el cargo de *****, adscrito a la Dirección General de ***** con efectos a partir del primero de febrero de dos mil cinco (foja 121 del expediente principal) e ingresó al Poder Judicial el dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y a este Alto Tribunal el primero de febrero de dos mil cinco, con una antigüedad de más de veinticinco años de ser servidor público (fojas 365 del expediente principal).

IV. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. Por lo que se refiere a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, se puntualiza que el bien jurídico tutelado es la obligación de acatar las normas que regulan el ejercicio de recursos públicos como son los viáticos, encaminadas a observar de los principios constitucionales que rigen su

administración, de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, deber que como se demostró no fue acatado, ya que ***** no devolvió, el remanente de los viáticos devengados en la comisión **DGCVS-041-2012** (foja 265 del expediente principal) que es lo que se reprocha en este procedimiento.

V. Reincidencia. Del registro de servidores públicos sancionados existe la inscripción de cuatro amonestaciones privadas impuestas a ***** por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los procedimientos de responsabilidad administrativa P.R.A. 90/2008, P.R.A. 123/2008, P.R.A. 122/2009 y P.R.A. 168/2009, mediante resoluciones de veintisiete de enero de dos mil once; lo anterior por incumplir la obligación establecida en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por infracción a la obligación prevista en el artículo 8, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no cumplir con el plazo establecido en el Acuerdo General de Administración XII/2003, para efectos de la comprobación de viáticos de diversas comisiones, es decir, por hechos similares a la materia de este procedimiento, por lo que se le considera reincidente.

En mérito de las consideraciones que anteceden, atendiendo a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan la obligación que se impone a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de reintegrar el remanente de los recursos otorgados como viáticos ejercidos dentro de los quince días siguientes a la conclusión de la comisión, así como a la conducta procesal observada por ***** durante el desarrollo del procedimiento, esta Presidencia estima que en atención a lo dispuesto en el artículo

135, fracción I, 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo conducente, artículo 4, fracción III, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal, en relación con el 45, fracción II, y 48, fracción II, del Acuerdo General Plenario 9/2005, se le debe imponer al infractor la sanción de **Amonestación Pública**.

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente de *****.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. ***** incurrió en la falta administrativa materia del presente procedimiento.

SEGUNDO. Se impone a ***** la sanción de **Amonestación Pública**.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos que procedan y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con

el Contador Público Guillermo Alejandro Posadas Espinosa,
Contralor de este Alto Tribunal que da fe.

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa **40/2012** instaurado en contra de
***** Conste.

AFBR/JGCR/JHT.*

“En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13,14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.